

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30 de Septiembre de 2020

AUTO No. 83.

MAGISTRADA PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

| | |
|-------------------|--|
| MEDIO DE CONTROL: | REPARACIÓN DIRECTA |
| EXPEDIENTE: | 76001-33-33-005-2016-00085-01 |
| DEMANDANTE: | ALBA NELLY VELASCO VELEZ Y OTROS |
| DEMANDADO: | NACIÓN-MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL |
| ASUNTO | APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO DE PRUEBAS |

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación, propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 494 del 13 de agosto de 2019, dictado en audiencia inicial y proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante el cual se tomó como prueba documental el concepto medico allegado con la demanda y no como prueba pericial, además de negarse el decreto de la solicitud de pruebas de oficio.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Alba Nelly Velasco Vélez y otros, solicitó se declare administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicio morales, fisiológicos y daño a la vida de relación, sufridos a causa de la falla en el servicio médico generando responsabilidad objetiva frente a la señora Alba Nelly Velasco Vélez.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 494 del 13 de agosto de 2019¹, dictado en audiencia inicial en el acápite de pruebas de la parte demandante, el a quo dispuso:

“...Se aclara que el concepto médico emitido por la Dra. Marly Yohanna Copete Saavedra, a folios 92 a 95 no cumple los requisitos del artículo 219 del CPACA para considerarse como tal, se aclara que el concepto médico (...) no se tramitará como prueba pericial por no cumplir los requisitos del artículo 219 del CPACA para considerarse como tal...”

Posteriormente, luego de la interpelación de dicho apoderado judicial, el Juez manifestó:

“...Antes de proseguir con el traslado del recurso de apelación el despacho se permite aclarar que el informe médico que se refiere allegado a folios 92 a 98 se

¹ Ver folios 100 a 105.



tiene como prueba documental pero no como dictamen pericial, es decir se va a considerar como prueba documental pero no como prueba pericial. En cuanto a la solicitud de pruebas de oficio, examinada la solicitud de pruebas planteadas en la demanda y en la respuesta del traslado del as excepciones visible a folios 13 del cuaderno principal y 387 del cuaderno 1 A, se puede observar que no se está solicitando ninguna de las pruebas a la que hace alusión el recurso de apelación, es decir oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y oficiar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que adelante oficiosamente un dictamen sobre este tópico, por tanto el despacho conceder el recurso de apelación, con las salvedades efectuadas en esta decisión...”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente en síntesis que (transcripción literal):

“...Su señoría frente a la decisión de no tener como prueba el concepto médico de la Dra. Marly Yohanna Copete interpongo recurso de apelación, le solicito muy comedidamente al superior jerárquico que le corresponda resolver esta alzada se sirva revocar la decisión adoptada por el Juez de primera instancia como quiera que en mi sentir la misma desconoce garantías ius naturales y ius constitucionales inherentes a la demandante y vulnera el debido proceso probatorio vale decir que el argumento de la primera instancia para negar el decreto de esta prueba, es decir que dicho documento no ostenta la calidad de lo que establece el artículo 219 y porque no el artículo 218 cuando se habla de prueba pericial, es de anotar que la primera instancia pasa de alto que en el libelo de la demanda en el capítulo de pruebas se establece que se aporta un concepto médico en ningún momento se hace alusión a que el mismo obedezca a un dictamen pericial y es allí precisamente donde se controvierte digamos que el procedimiento médico que en nuestro sentir genero el daño y es aquí donde se importante la figura del juez dentro del marco de un Estado social de derecho como la establecido la sentencia SU – 768 de 2014 cuando dice que el Juez en la búsqueda de la verdad y en su imperativo para que el juez es un presupuesto para que las decisiones sean más justas. Partiendo de la base de ese concepto medico se hace necesario que usted señor Juez en el decreto de pruebas haga uso de lo que establece el artículo 213 que habla de pruebas de oficio que dice que en cualquiera de las instancia el Juez o Magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pruebas pedidas y es precisamente ahí señor Juez donde a la búsqueda de ese dictamen pericial se requiere de que el juez en un auto de mejor proveer cuando la etapa probatoria haya finalizado en su estadio procesal se sirva oficiar con base en ese concepto médico al Instituto Colombiano de Medicina Legal, primero para que establezca el grado de afectación en su cuerpo es decir las secuelas definitivas para establecer si son de carácter permanente o temporal si hubo o no afectación del órgano de la locomoción u otras afectaciones derivadas del hecho que origino el daño, también se establezca se remita a medicina legal para efectos de establecer el grado de afectación psicológica como quiera que esa intervención quirúrgica que genero un daño en el cuerpo pues la ha afectado moralmente y tercero se sirva remitir una allegado el dictamen de medicina legal a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca para determinar si esa lesión o esas secuelas dejaron algún tipo de perdida de la capacidad laboral. Hay que dejar claro que el estatuto acogió en materia probatoria el principio inquisitivo es decir fundado en la lógica y la obvia razón de que a pesar de que en el común de los procesos se controvierten intereses privados la



justicia no puede volverse la espalda al reconocimiento de la verdad material y en frente de los interés en pugna asumiendo una posición eminente pasiva, si encuentra que decretando pruebas de oficio puede a la postre mediante ella verificar los hechos alegados por las partes y lograr que en definitiva brille la verdad y por lo tanto se imponga la justicia. En este caso en particular partimos de la base de que hay una víctima, también partimos de la base que hay unas partes que están en todo su derecho de defenderse y desvirtuar digamos los imperativos de hechos pero también es una obligación del Juez esclarecer la verdad hallar la verdad, garantizar ese derecho a la verdad a la justicia y porque no a la reparación, por eso se hace necesario que el Juez de segunda instancia atendiendo el interés y la prioridad del derecho sustancial se sirva revocar este auto y en su lugar se sirva decretar la prueba rechazada por la primera instancia y en su defecto para efectos de aclarar la verdad se sirva decretar pruebas de oficio que en este caso en particular se hacen necesarias para efectos de decretar la verdad. ” (Min: 15:36)

CONSIDERACIONES:

5. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

6. DEL DECRETO DE PRUEBAS

Conforme con lo establecido en el artículo 180² de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y terceros, siempre que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales existe disconformidad.

El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia probatoria, en lo que no esté expresamente regulado se aplicarán las normas del Estatuto Procesal Civil, hoy Código General del Proceso.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en su artículo 168 establece que *“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las*

² **Artículo 180. Audiencia inicial.** Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.

inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles", así las cosas, de la norma en cita se colige que para determinar el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

7. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Es procedente tener como prueba documental el concepto médico aportado, además de decretar las pruebas de oficio solicitadas en el recurso de apelación por la parte demandante?

8. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328³ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁴ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Conforme a las normas precedentemente citadas, se colige que el juez debe limitarse a resolver los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales han de estar relacionados, en virtud de la congruencia, con las consideraciones que sustentaron la decisión del *a quo*.

Al respecto, el Consejo de Estado señaló que, "... la eficacia de la sustentación de los recursos interpuestos por los apelantes únicos, parte de razones específicas y concretamente dirigidas a refutar o contradecir los apartes de los fallos que consideraren adversos o perjudiciales a sus individuales intereses dentro de la relación jurídico-procesal"⁵.

Establecido lo anterior, es preciso entrar a resolver el asunto en cuestión de la siguiente manera:

1. DICTAMEN PERICIAL

Al respecto tenemos, que la parte demandante aportó con la demanda el concepto médico suscrito por la doctora Marly Yohanna Copete (fls. 94 a 96), el cual fue si bien inicialmente fue negado como prueba pericial por no cumplir con los requisitos

³ Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(...)

⁴ ARTÍCULO 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación número: 05001-23-31-000-2000-03018-01.



establecidos en el artículo 219 del CPACA, posteriormente fue aceptado como una prueba documental.

Respecto a los reparos del recurrente, se indicó que en el libelo de la demanda en el capítulo de pruebas la misma fue aportada como un concepto médico y no como un dictamen pericial, pues su objetivo con este concepto era que el juez de primera instancia hiciera uso de su facultad oficiosa consagrada en el artículo 213 del CPACA, ordenando oficiar tanto al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para que se estableciera un dictamen respecto al estado físico, mental y laboral de la demandante.

Los requisitos del dictamen pericial se encuentran consagrados en el artículo 219 del CPACA:

“ARTÍCULO 219. PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES POR LAS PARTES. Las partes, en la oportunidad establecida en este Código, podrán aportar dictámenes emitidos por instituciones o profesionales especializados e idóneos.

Para tal efecto, al emitir su dictamen, los expertos deberán manifestar bajo juramento, que se entiende prestado por la firma del mismo, que no se encuentran incursos en las causales de impedimento para actuar como peritos en el respectivo proceso, que aceptan el régimen jurídico de responsabilidad como auxiliares de la justicia, que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, indicando las razones técnicas, de idoneidad y experiencia que sustenten dicha afirmación, y que han actuado leal y fielmente en el desempeño de su labor, con objetividad e imparcialidad, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Señalarán los documentos con base en los cuales rinden su dictamen y de no obrar en el expediente, de ser posible, los allegarán como anexo de este y el juramento comprenderá la afirmación de que todos los fundamentos del mismo son ciertos y fueron verificados personalmente por el perito.

Son causales de impedimento para actuar como perito que darán lugar a tacharlo mediante el procedimiento establecido para los testigos, las siguientes:

- 1. Ser cónyuge, compañera o compañero permanente o tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el funcionario que conozca del proceso, los empleados del despacho, las partes o apoderados que actúen en él, y con las personas que intervinieron en la elección de aquel.*
- 2. Tener interés, directo o indirecto, en la gestión o decisión objeto del proceso, distinto del derivado de la relación contractual establecida con la parte para quien rinde el dictamen.*
- 3. Encontrarse dentro de las causales de exclusión indicadas en el Acuerdo número 1518 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura o la norma que lo sustituya, de las cuales no será aplicable la establecida en el numeral segundo relativa al domicilio del perito.*
- 4. Cualquier otra circunstancia que evidencie su falta de idoneidad profesional.*

La configuración de cualquiera de las anteriores causales de impedimento, dará lugar a la tacha del perito.

Cuando el dictamen pericial sea aportado por las partes, la tacha deberá ser formulada antes de la realización de la audiencia siguiente a la aportación del dictamen y se decidirá en esta.

Cuando se trate de la tacha de peritos designados por el juez, se seguirá el trámite establecido por el Código de Procedimiento Civil.

PARÁGRAFO. *Las personas que elaboren un dictamen para ser presentado en un proceso judicial, estarán sujetas al régimen de responsabilidad consagrado para los peritos como auxiliares de la justicia.”*

En igual sentido, el artículo 226 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, regula el dictamen pericial aportado por las partes, indicando los requisitos mínimos que debe contener:

“ARTÍCULO 226. PROCEDENCIA. *La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.*

Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.

No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

- 1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.*
- 2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.*
- 3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.*
- 4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.*
- 5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.*
- 6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.*
- 7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.*
- 8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.*



9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.”

Teniendo en cuenta los lineamientos anteriores, es claro que los requisitos del dictamen pericial tiene la necesidad de garantizar la idoneidad e imparcialidad en la elaboración del mismo por parte del perito, a fin de ser tenido en cuenta por el juez al momento de proferir sentencia.

Por lo tanto, es claro que para que la prueba aportada sea tenida en cuenta como pericial y sea incorporada al proceso como tal, es necesario que ésta sea presentada siguiendo los lineamientos del artículo 219 de CPACA.

Ahora, de la revisión del expediente, puede decirse que efectivamente tal como lo manifestó el demandante en el recurso de apelación, la prueba del concepto médico, no fue solicitada como prueba pericial, sino aportada como prueba documental dentro del proceso, por tanto si bien los argumentos del juez son totalmente válidos al negar su decreto como prueba pericial, también es cierto que acertó al aceptarla como prueba documental.

2. PRUEBAS DE OFICIO.

En lo que respecta a las pruebas de oficio, se tiene que el artículo 213 del CPACA, establece:

“ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.” (Subraya fuera de texto).

Al respecto el Consejo de Estado, ha indicado que:

“...Con el fin de establecer puntos oscuros de la controversia y en aras de garantizar la decisión basada en la verdad material, el juez puede decretar pruebas de oficio en cualquier instancia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del código de lo contencioso administrativo, en cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Esta facultad, para esclarecer puntos oscuros de la contienda, a la luz de la constitución no solo es una facultad sino un deber legal del juez, siendo la búsqueda

de la verdad de imperiosa necesidad en aras de que la decisión se justa. Así, conforme con la jurisprudencia constitucional el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un verdadero deber legal, pues, la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas...⁶

En cuanto a las pruebas de oficio y la distribución de la carga de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha respaldado su legitimidad, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas⁷. En particular, la Corte ha establecido que el principio del *onus probandi* como exigencia general de conducta prevista por el Legislador no se refleja como irrazonable ni desproporcionada, pues responde a fines constitucionalmente legítimos, como son ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo⁸.

Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación⁹, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material¹⁰.

Nótese de todo lo expuesto, que si bien es función del Juez tener un papel activo en el decreto de las pruebas dentro del proceso, con el fin de llegar al esclarecimiento de la verdad, no es menos cierto que este papel no puede ser interpretado como lo hace el demandante quien pretende se decreten pruebas que no fueron solicitadas con el escrito de la demanda, pretendiendo con ello suplir la carga de la prueba que le corresponde desde el inicio del proceso. Así entonces, esta corporación comparte la decisión del juez en cuanto negó el decreto de las pruebas de oficio solicitadas por la parte demandante, toda vez que las mismas no fueron solicitadas con la demanda. Lo anterior, sin afectar la autonomía que le es propia, de hacer uso de su facultad discrecional de decretar pruebas de oficio en cualquiera de las instancias del proceso para evitar la injusticia y realizar el valor de la verdad como soporte de la legitimidad de la jurisdicción.

Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto se confirmara el auto nro. 494 del 13 de agosto de 2019, donde se aceptó el concepto medico como prueba pericial y se negó el decreto de las pruebas de oficio solicitadas por la parte demandante.

En consecuencia, se;

⁶ Consejo de Estado. Auto 2005-00148 de abril 24 de 2017. SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente: 42.155. Radicación: 470012331000200500148 01. Actor: Mohamed Yohaid Yassin y otros. Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Asunto: Auto Para Mejor Proveer.

⁷ Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012.

⁸ Sentencia C-086 de 2016; M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

⁹ Esta subregla fue formulada originalmente por la sentencia T-264 de 2009 y reiterada en la sentencia T-950 de 2011.

¹⁰ Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2016-00085-01
: REPRACIÓN DIRECTA
: ALBA NELLY VELASCO VELEZ Y OTROS
: NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL



9

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 494 dictado en audiencia inicial del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado

Elab. Yurani López
Vo.Bo. Secretario